

El PSOE aragonés no descarta ninguna vía para pedir el pago de los 80 millones del IVA de 2017

● PP, Cs y CHA instan a la DGA a exigir a Hacienda el dinero adeudado, que otras regiones van a reclamar en los tribunales

ZARAGOZA. Aragón no renuncia a recibir los 80 millones de euros correspondientes a un mes del IVA de 2017 y «no descarta ninguna vía para defender los intereses de la Comunidad». Así lo anunció ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, que espera que el Ejecutivo autonómico pueda negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la llegada de la cantidad adeudada a la Comunidad, que se engloba en los 2.500 millones de euros que se deberían repartir entre todas las autonomías. PP, Ciudadanos, Vox y CHA instaron al Gobierno aragonés a que reclame el pago «por todas las vías posibles», después de que varias comunidades como Galicia y Castilla y León hayan anunciado ya que recurrirán en los tribunales la devolución del importe adeudado.

Guillén explicó que, a pesar de las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, la DGA no tiene aún «comunicación oficial al respecto». Esperarán, por

tanto, a tenerla para valorar qué decisión tomar, aunque dejó todas las vías abiertas.

No lo debe tener muy claro el Gobierno de Sánchez cuando, precisamente ayer, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, indicaba que estudiará cómo abordar la cuestión en el contexto de preparación de las nuevas cuentas públicas.

Dos años lleva la DGA a vueltas con el pago del IVA. Fue el exconsejero de Hacienda, el socialista Fernando Gimeno, el primero en exigir al Gobierno liderado entonces por Mariano Rajoy el pago de un mes de IVA correspondiente a 2017, que no se abonó a las autonomías por un cambio en el sistema de información. La reivindicación se llegó a plantear de forma conjunta con otras autonomías de la España vaciada, Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja, con la firma de la Declaración de Zaragoza un año después. Cuando le sustituyó en el cargo Carlos Pérez Anadón (PSOE) asumió la reivindicación del IVA de 2017, que solicitó en varias ocasiones el año pasado, cada

vez que reclamaba al Gobierno en funciones el pago de 400 millones por las entregas a cuenta.

Muy crítico con esta situación se mostró el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte. «Quieren utilizar los 2.500 millones para pagar las hipotecas de la investidura», declaró, y acusó a Sánchez de «ser el mayor moroso» por sus deudas con las autonomías. Respecto a los 80 millones de Aragón, Beamonte instó al presidente de Aragón, Javier Lambán, a «reaccionar judicialmente» y a pedir que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no se reúne desde hace 20 meses.

También se mostró muy crítico con la situación Daniel Pérez Calvo, portavoz de Cs en Aragón. De inicio, recordó que su grupo ya denunció que en los presupuestos de la Comunidad de 2020 «no estaban claros los ingresos». Incidió, por ello, en conocer cómo se van a hacer los ajustes. Recordó, además, que el propio presidente Lambán anunció que no permitiría tratos desiguales entre las autonomías y le pidió que re-

clame los 20 millones «de la forma que sea».

Mientras el vicepresidente de la DGA, el aragonés Arturo Aliaga, y Podemos Aragón cerraban filas con el Gobierno, a la espera de más información y asumiendo su decisión, el portavoz de CHA en las Cortes, Joaquín Palacín, solicitaba al cuatripartito, del que forma parte, que reclame los 80 millones del IVA «en todos los órganos pertinentes, hasta conseguirlos». «Se tiene que demostrar que ahora sí se quiere afrontar de forma distinta desde el Gobierno de España el problema territorial y la financiación, y esa cuestión del pago del IVA servirá para medir hasta dónde es real este compromiso».

En Vox afearon al Ejecutivo de Sánchez que, el mismo día que se aprobaron las entregas a cuenta de 103.000 millones, se dejaba a las regiones sin los 2.500 millones del IVA. «Parece que el Gobierno necesita aprobar unos presupuestos, y que todo vale para ejercer presión a las comunidades autónomas y conseguir los apoyos necesarios», declaró el presidente de Vox en Zaragoza, Santiago Morón. Recordó, además, a la DGA que «debería velar por los intereses de los aragoneses».

Más que en el pago del IVA adeudado, Álvaro Sanz, diputado de IU-Aragón, se refirió a la reforma de la financiación autonómica pues, en su opinión, «la política fiscal no puede fiarse exclusivamente a los ingresos derivados del consumo y que pagamos todos por igual».

MÓNICA FUENTES

La DGA destina 2,5 millones a infraestructuras de la Universidad

ZARAGOZA. La Comisión Mixta entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza aprobó ayer una inversión de 2,5 millones de euros para infraestructuras de la institución académica, de los que 725.000 se destinarán a mejorar la eficiencia energética de la Facultad de Economía.

La inversión aprobada se enmarca dentro del contrato-programa del Plan de Inversiones e Investigación, entre las que destacan los 725.000 euros destinados a sustituir las ventanas de la Facultad de Economía así como otras enmarcadas en la lucha contra el cambio climático, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e inversiones para la mejora de infraestructuras investigadoras.

En el ámbito del cumplimiento de los ODS se ha aprobado un proyecto que asciende a 275.000 euros para la instalación de cinco puntos de recarga de coches eléctricos en los campus de San Francisco, Veterinaria y Río Ebro, la Escuela Politécnica Superior de Huesca y en el de Teruel, con la posibilidad de abastecer a dos vehículos a través de bases de 2x22kW de potencia, de carga semi-rápida.

HA

Once municipios dejarán de cobrar dos millones de euros por el IBI cuando se liberalice la AP-2

La concesión de la autopista expira en agosto de 2021 y podría revertir al Estado, que está exento del pago de este impuesto

ZARAGOZA. El último accidente en el tramo sin desdoblarse de la N-II en Osera de Ebro, que provocó tres fallecidos, reitera la necesidad de una solución que ponga fin a la dramática situación de esta vía, que en los últimos seis años se ha cobrado ya 25 vidas.

El ansiado y reivindicado desdoblamiento de la carretera parece diluirse en favor de la liberalización de la autopista de Barcelona (AP-2), que discurre en paralelo a la N-II, y cuya concesión expira en agosto de 2021. En Aragón, esta infraestructura viaria alcanza los 100 kilómetros y afecta a once localidades. Los siete ayuntamientos zaragozanos (Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Osera, Pina de Ebro, La Almolda y Bujaraloz) y cuatro oscenses (Peñalba, Candasnos, Fraga y Torrente de Cinca) vieron cómo en 2017 se incrementaban sus ingresos al perder la multinacional Abertis, concesionaria de

la autopista AP-2, la histórica bonificación de la que disfrutaba en el impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales. A partir de entonces, pasó de abonar solo el 5% de este tributo a ingresar el importe completo, lo que supuso una inyección económica global de casi 2 millones para las arcas municipales.

Las cantidades oscilan desde los 30.595,02 euros que percibe Osera de Ebro a los 341.492 euros que ingresa Fraga. Entre las mayores beneficiarias se encuentran La Almolda (300.000 euros), Villafranca de Ebro (232.000), Peñalba (231.316), Torrente de Cinca (191.914) y Pina de Ebro (160.000). El resto de localidades son: Bujaraloz (58.145,60), Nuez de Ebro (unos 50.000 euros), Alfajarín (45.000) y Candasnos (falta por concretar el importe). En total, cerca de dos millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Fomento informaron ayer de que la Administración General del Estado, como titular de la red estatal de carreteras, está exenta del pago del IBI por bienes de aprovechamiento público y gratuito afectos a las carreteras. Esta disposición está recogida en el artículo



Accidente mortal registrado el martes en Osera de Ebro. TONI GALÁN

64 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

El alcalde de La Almolda, Manuel Lamencá, destacó que «lo ideal es que estuviera desdoblada la N-II y que la autopista siguiera dando un buen servicio» pero «por encima de todo están las vidas». «Me preocupan también los puestos de trabajo que

genera la autopista en la zona. Todo tiene sus pros y sus contras». La regidora de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez, destacó que reciben 234.000 euros por este concepto, en un presupuesto de un millón: «Los pueblos pequeños perdemos mucho dinero que destinamos a organizar actividades y reparar averías».

La responsable de Pina de Ebro, Mercedes Abós, mostró su satisfacción con el final de la concesión de la autopista: «La seguridad vial es más importante que el dinero. Hasta ahora se pasaba sin esa aportación». Una opinión similar trasladó la alcaldesa de Nuez de Ebro, María Isabel Toro, quien adelantó que «si el Ayuntamiento dejara de ingresar el dinero del IBI tendría que organizar de otra manera el presupuesto, que no llega al millón». «Hoy por hoy -destacó- la N-II es un peligro». Para Jesús Vicén, primer edil de Alfajarín, se trata de «poner todo en una balanza y gana la seguridad vial». Por su parte, Pilar Briz, teniente de alcalde de Osera, que registró un accidente mortal el pasado martes, reconoció que perciben una cantidad de 30.595,02 € por el IBI pero «hasta 2017 era 0». José Evaristo Cabistañá, alcalde de Torrente de Cinca, recordó que casi 8 kilómetros de la AP-2 atraviesan el término.

Para el regidor de Bujaraloz, Darío Villagrasa, si el Ayuntamiento dejara de percibir ese impuesto defendería, en el marco de la legalidad vigente, seguir recibiendo ingresos «por cruzar una gran infraestructura de titularidad y gestión estatal». Ese será, no obstante, un debate «que habrá que afrontar en 2021 cuando se conozcan todas las circunstancias».

E. P. B.